

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO RELATIVA A LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN AL INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DOS MIL VEINTIUNO, SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA ESTATAL DENOMINADA “INSTITUTO POLÍTICO EMPRESARIAL DE JALISCO”.**

Visto el dictamen consolidado emitido por la Unidad de Fiscalización del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco<sup>1</sup>, respecto del informe del ejercicio anual dos mil veintiuno, sobre el origen y destino de los recursos de la Agrupación Política Estatal “**INSTITUTO POLÍTICO EMPRESARIAL DE JALISCO**”.<sup>2</sup> y

**RESULTANDOS:**

- 1. Acuerdo del Consejo General de este Instituto que aprueba el periodo vacacional para el personal de este organismo electoral, correspondiente al año dos mil veintiuno.** Con fecha diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el acuerdo referido identificado con el número IEPC-ACG-397/2021, **fue aprobado el periodo vacacional** correspondiente al año dos mil veintiuno, que abarcó el periodo correspondiente del **diez al veintiuno de enero** de dos mil veintidós, mismo que fue determinado como **inhábil**, por lo que influye en el cómputo del plazo para presentación del Informe Anual del año dos mil veintiuno.
- 2. Notificación del plazo para la presentación del informe financiero anual del ejercicio dos mil veintiuno, a la Agrupación política estatal “INSTITUTO POLÍTICO EMPRESARIAL DE JALISCO”.** Mediante oficio 003/2022 Unidad de Fiscalización, de fecha veinticuatro de enero de 2022 dos mil veintidós, se notificó a la Agrupación Política Estatal, el plazo para la presentación del Informe Financiero Anual dos mil veintiuno, mismo que inició el día 03 tres de enero, concluyendo el día veinticinco de mayo de 2022, en dicho plazo se consideró el periodo vacacional

<sup>1</sup> El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco en lo sucesivo será referido como Instituto Electoral.

<sup>2</sup> “Instituto Político Empresarial De Jalisco”. en lo sucesivo será referido como agrupación política estatal.

correspondiente al año dos mil veintiuno, periodo que influye en el cómputo del plazo para presentación del Informe referido.

3. **Acuerdo del Consejo General de este Instituto que aprueba los dos periodos vacacionales para el personal de este organismo electoral, correspondientes al año dos mil veintidós.** Con fecha diez de marzo de dos mil veintidós, mediante el acuerdo referido identificado con el número IEPC-ACG-021/2022, **fueron aprobados los dos periodos vacacionales** correspondiente al año dos mil veintidós, en el que se establece que el primero abarcó el periodo del día **uno al doce de agosto** de dos mil veintidós, mismo que fue determinado como **inhábil**, e impacta en el cómputo de los plazos del procedimiento de revisión del Informe Anual del año dos mil veintiuno.
4. **Errores u omisiones técnicas.** Mediante **oficio 027/2022** Unidad de Fiscalización, de fecha veintisiete de julio dos mil veintidós, se notificó a la Agrupación Política Estatal, la existencia de errores u omisiones técnicas en que incurrió, para que, en un plazo de 10 días contados a partir de la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes, plazo que concluyó el día veinticuatro de agosto de 2022, ya que, se consideró el primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintidós, que abarcó el periodo del primero al doce de agosto de dos mil veintidós, influyendo en el cómputo de dicho plazo.
5. **Presentación del informe.** El día **veinticuatro de agosto de dos mil veintidós**, la Agrupación Política Estatal presentó, en respuesta al **oficio 027/2022** Unidad de Fiscalización, escrito al que le correspondió el número de **folio 01084** de Oficialía de Partes de este Instituto Electoral, por medio del cual presentó el informe sobre el origen y destino de los recursos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento correspondiente al ejercicio anual dos mil veintiuno, así como reporte de la realización dentro del territorio del estado de Jalisco, de cuando menos una actividad reconocida de las agrupaciones políticas estatales.
6. **Conclusión del procedimiento de revisión de los informes.** Una vez que se desahogó el procedimiento de revisión del informe anual del ejercicio 2021 dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización se avocó a elaborar el dictamen consolidado respectivo, disponiendo de un plazo de 20 veinte días hábiles para elaborarlo.

7. **Elaboración del dictamen consolidado.** El día tres de octubre del año dos mil veintidós, la Unidad de Fiscalización emitió el Dictamen Consolidado respectivo.
8. **Remisión del dictamen consolidado y proyecto de resolución formulado por la Unidad al Consejo General.** El día seis de octubre del año dos mil veintidós, la Unidad de Fiscalización remitió a la Secretaría Ejecutiva, para que lo ponga a disposición del Consejo General el dictamen consolidado y el proyecto de resolución que propone la sanción respectiva, a los errores o irregularidades encontradas en el informe o generadas con motivo de su revisión y que se desprenden del capítulo **VIII. CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN** del citado dictamen, y el cual señala lo siguiente:

"(...)

- *Es de presumirse que la conducta desplegada por la agrupación política estatal, que se desprende del capítulo VII, apartado A), número 1 de este dictamen consolidado, consistente en que: la agrupación política estatal "Instituto Político Empresarial de Jalisco", incurrió en una irregularidad, ya que **presentó su Informe Anual del ejercicio dos mil veintiuno**, sobre el origen y destino de los recursos que recibieron por cualquier modalidad, **de manera extemporánea**, incumpliendo el plazo establecido en el artículo 63 párrafo 7, en concordancia con el artículo 28, párrafo 1 del Reglamento General de Fiscalización de este Instituto; en consecuencia se ubicó en la hipótesis de infracción prevista por el artículo 448 párrafo 1, por incumplimiento a lo que establece el artículo 63, párrafo 7 del mismo Código, en concordancia con el artículo 28, párrafo 1 del Reglamento General de Fiscalización de este Instituto.*

Por lo que esta autoridad procede a pronunciarse al respecto bajo los siguientes

### **CONSIDERANDOS:**

**1. Fundamento Legal.** Conforme a lo que disponen los artículos 41 base V, apartado C; y 116, base IV, inciso c), de la Constitución Política Mexicana, artículo 12, bases III y IV y 13 de la Constitución Política Local; artículos 4, párrafos 1 y 2, 62, párrafo 4, 91 párrafo 2, 115 y 116, párrafo 1, 120; 134 párrafo 1, fracciones VIII, XIII, XXII, LVII, y 460 del Código Electoral del Estado de Jalisco<sup>2</sup>, artículos 1, 2, 10, 29, 30, 31 párrafo 5, y 32 del Reglamento General de Fiscalización así como también el artículo 23 párrafo 1,

<sup>3</sup> Código Electoral del Estado de Jalisco en lo sucesivo será referido como Código Electoral.

fracción IV del Reglamento Interior de este Instituto Electoral, es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión al informe anual del ejercicio dos mil veintiuno, sobre el origen y destino de los recursos de la agrupación política estatal denominada **“INSTITUTO POLÍTICO EMPRESARIAL DE JALISCO”**, siendo el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.

**2. Análisis del dictamen consolidado por parte del Consejo General.** De conformidad con lo establecido por los artículos 31 párrafo 3, 4 y 5, y 32 del Reglamento General de Fiscalización, artículo 542 del Código Electoral, este órgano colegiado procede a analizar el Dictamen Consolidado emitido por la Unidad de Fiscalización el tres de octubre de dos mil veintidós, para estar en aptitud legal de resolver sobre si la agrupación política estatal incumplió **“...las obligaciones y procedimientos de fiscalización de sus recursos...”** que le impone la Ley Electoral así como **“...las reglas establecidas para el manejo y comprobación de sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de los mismos”**, al ser sujetos de responsabilidad y que son susceptibles de ser sancionadas, para ello es imprescindible tener presente el contenido de los preceptos que se estimaron violados en los referido dictamen consolidado y sí con ello, se actualizan las infracciones previstas en el artículo 448, del Código Electoral y los diversos artículos que van del 17 al 35 del Reglamento General de Fiscalización, respecto a la revisión efectuada a informe anual del ejercicio dos mil veintiuno, sobre el origen y destino de los recursos presentado por la agrupación política estatal.

Según se desprende del capítulo **VIII. CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN** del dictamen consolidado antes referido, a la agrupación política estatal se le atribuye como infracción lo siguiente:

*“(...)*

- *Es de presumirse que la conducta desplegada por la agrupación política estatal, que se desprende del capítulo VII, apartado A), número 1 de este dictamen consolidado, consistente en que: la agrupación política estatal “Instituto Político Empresarial de Jalisco”, incurrió en una irregularidad, ya que **presentó su Informe Anual del ejercicio dos mil veintiuno**, sobre el origen y destino de los recursos que recibieron por cualquier modalidad, **de manera extemporánea**, incumpliendo el plazo establecido en el artículo 63 párrafo 7, en concordancia con el artículo 28, párrafo 1 del Reglamento General de Fiscalización de este Instituto; en*

*consecuencia se ubicó en la hipótesis de infracción prevista por el artículo 448 párrafo 1, por incumplimiento a lo que establece el artículo 63, párrafo 7 del mismo Código, en concordancia con el artículo 28, párrafo 1 del Reglamento General de Fiscalización de este Instituto.*

Por lo anterior, del dictamen consolidado sujeto al presente análisis, se desprende que la Agrupación Política Estatal cometió una conducta que pudieran actualizar la hipótesis de infracción contemplada en los artículos 448 párrafo 1, fracción II, por incumplimiento a lo que establece el artículo 63, párrafo 7, del Código Electoral, en concordancia con el artículo 28, párrafo 1 del Reglamento General de Fiscalización.

**3. Responsabilidad.** Al acreditarse la infracción administrativa que se le atribuye a la agrupación política estatal, en el dictamen consolidado emitido por la Unidad de Fiscalización, es menester analizar si dicha circunstancia trae aparejada la imposición de sanciones en su contra o, si por el contrario, existen causas que lo justifiquen y, por ende, debe atenuarse o relevársele de la misma.

Lo anterior es así, porque sin desconocer de manera alguna la trascendencia que reviste el cumplimiento de las obligaciones que debe observar la agrupación política estatal, para concluir si una infracción administrativa debe ser sancionada es indispensable tomar en cuenta las circunstancias que rodearon su comisión tal como lo reconoce el legislador en los artículos 448, 459 párrafo 5, del Código Electoral y artículos 31 párrafo 5 y 32 párrafo 1 del Reglamento General de Fiscalización; por lo que, es necesario analizar si la infracción respectiva encuentra alguna causa de justificación.

**4. Capacidad económica.** Para efectos de la imposición de sanciones debe verificarse que la capacidad económica de la agrupación política estatal sea suficiente para que esta no sea desproporcionada. En razón de ello, esta autoridad debe valorar la circunstancia de los sujetos infractores respecto su capacidad económica, es decir, al conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación pecuniaria, al momento de individualizar la sanción; obligación sustentada en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria depende del estado patrimonial del responsable, lo que podría resultar gravoso para un sujeto en estado de insolvencia al imponerse una multa. Lo anterior, dado que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP 399/2012 se pronunció sobre la obligación de la autoridad

administrativa de cerciorarse de la capacidad económica real del sujeto responsable de la falta, previo a la imposición de la sanción.

De igual manera es importante destacar que la agrupación política estatal no recibió financiamiento público para la realización de sus actividades durante el ejercicio que se fiscaliza, por lo que la imposición de una sanción pecuniaria depende del estado patrimonial del responsable sobre sus ingresos de financiamiento privado y los egresos reportados.

**5. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).** Para efectos de determinar la sanción aplicable por la comisión de la falta administrativa, este Consejo General toma en consideración que la agrupación política estatal, ha reincidido en la infracción, lo cual, se desprende del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto Electoral.

**6. Calificación de la falta e imposición de la sanción.** De la revisión llevada a cabo y plasmados en el Dictamen Consolidado correspondiente a la revisión del Informe Anual del ejercicio dos mil veintiuno y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que la irregularidad en que incurrió la agrupación política estatal la ubicó en **una** hipótesis de responsabilidad administrativa, por lo que resulta procedente calificar la falta y posteriormente determinar la individualización de la sanción que se le ha de imponer atendiendo a la legislación actual, por ser ésta la vigente en la época en que ocurrieron los hechos, por lo que, corresponde estudiarla como sigue:

#### **A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.**

##### **a) 1 Falta de carácter formal.**

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que esta autoridad respetó la garantía de audiencia y defensa del sujeto obligado, contemplada en los artículos 63 párrafos 6 y 7 del Código Electoral, y 29 párrafos 1 y 2, y 30 párrafos 1,2, 4 del Reglamento General de Fiscalización, toda vez que al advertir la existencia de errores y omisiones técnicas durante el procedimiento de revisión del Informe Anual de la agrupación política estatal correspondiente al ejercicio dos mil veintiuno, en específico,

que el Instituto político omitió presentar el Informe Anual del ejercicio dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización notificó a la agrupación política en cuestión mediante el oficio respectivo para que dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir de su notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes, así como la documentación que subsanara las irregularidades observadas; sin embargo, el sujeto obligado si bien solventó la observación formulada, con la presentación del Informe referido, esta fue atendida de manera extemporánea, ya que, entregó su informe con fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, rebasando el plazo establecido, mismo que concluyó el veinticinco de mayo de la misma anualidad, incurriendo en una irregularidad, ya que **presentó su Informe Anual del ejercicio dos mil veintiuno**, sobre el origen y destino de los recursos que recibieron por cualquier modalidad, **de manera extemporánea**, incumpliendo el plazo establecido en el artículo 63, párrafo 7, en concordancia con el artículo 28, párrafo 1 del Reglamento General de Fiscalización de este Instituto.

De lo anterior se desprende que la agrupación política estatal puso en peligro los principios de transparencia y rendición de cuentas al no encuadrar sus actividades dentro de los confines establecidos por la normatividad comicial, y dejar de observar el contenido predeterminado por la ley electoral.

En efecto, la conducta descrita en el apartado anterior constituye una falta de forma que no implica una afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, sino que únicamente representan infracciones en la rendición de cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida en el plazo establecido por la normatividad de la materia, no representan un indebido manejo de recursos.

En ese sentido, sin duda, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 19

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados, rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, de esta forma, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En el caso concreto, se acredita **una falta formal** puesto que la presentación extemporánea de su informe anual es una irregularidad de tiempo que no pone en peligro la actividad de fiscalización y solo la obstaculizó, más no impidió transparentar los recursos y conocer el ejercicio y destino eficiente y legal de los mismos.

#### **B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.**

Derivado de la acreditación y calificación de la falta, lo procedente es determinar la imposición de la sanción iniciando por el análisis, de que el sujeto obligado carece de capacidad económica para hacer frente a sanciones pecuniarias que se le pudieran imponer, por lo que, esta autoridad debe considerar la imposición de una sanción que pueda hacerse efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad buscada ni tampoco tendría objeto una sanción que no pueda aplicarse al no haber incidencia directa sobre la conducta del sujeto infractor; por ello, en el supuesto actual, la autoridad administrativa debe optar por una sanción no pecuniaria a efecto de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que se propone que **la sanción a imponer en el caso concreto sea la Amonestación Pública.**

Considerando que la sanción que debe imponerse a la agrupación política estatal no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a la graduación de la sanción y que esta afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su haber económico.

Independientemente de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para determinar la clase de sanción